



CLASE DE PROCESO: ACCION DE TUTELA
ACCIONANTE: COOPERATIVA DE APOORTE Y CREDITO BUEN FURURO EN INTERVENCION-BUEN FUTURO EN INTERVENCION
AGENTE INTERVENTORA Y REP. LEGAL: MARIA MERCEDES PERRY FERREIRA
ACCIONADO: ALCALDA MUNICIPAL DE MALAMBO
DERECHO VULNERADO: PETICION
RADICACIÓN: 08433-40-89-005-2023-00225-00

JUZGADO SEGUNDO PROMISCOU MUNICIPAL DE MALAMBO
Dieciocho (18) de julio del año dos mil veintitrés (2023)

I.CUESTION A TRATAR:

Procede el Despacho a decidir lo que en derecho corresponda con relación a la Acción de Tutela interpuesta por la **COOPERATIVA DE APOORTE Y CREDITO BUEN FURURO EN INTERVENCION-BUEN FUTURO EN INTERVENCION**, a través de su Representante Legal y Agente Interventora Sra. **MARIA MERCEDES PERRY FERREIRA** identificada con C.C. No. 20.902.555, en contra de la **ALCALDA MUNICIPAL DE MALAMBO**, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de Petición (Art. 23) de la Constitución Nacional.

II.- HECHOS

1. La accionante presentó solicitud mediante derecho de petición a través de la comunicación BF-INT-027-2022 de fecha 27 de abril de 2022, dirigida a la Pagaduría de la Alcaldía Municipal de Malambo Atlántico, enviada el 27 de abril de 2022, por correo electrónico contactenos@malambo-atlantico.gov.co, el cual adjunta copia simple.
2. Hasta la fecha de la presente acción de tutela se han enviado diez (10) correos, reiterando la solicitud del derecho de petición a los correos contactenos@malambo-atlantico.gov.co; educación@malambo-atlantico.gov.co; mimeza24@hotmail.com; piedad-leal@hotmail.com; talento@malambo-atlantico.gov.co todo lo cual se adjunta en copia simple.
3. A la fecha de la acción de la Acción de Tutela y habiendo culminado el término legal establecido, no se ha recibido respuesta satisfactoria a la solicitud realizada por parte de la suscrita.

III.- PRETENSIONES

Con fundamento en los hechos expuestos, solicito al señor Juez:

1. Amparar el derecho fundamental de Petición, a favor de la Cooperativa de Aporte y Crédito Buen Futuro en Intervención- Buen Futuro en Intervención.
2. Se ordene a la Pagaduría que, dentro de las 48 horas, siguientes a la notificación del fallo de tutela, envíe respuesta adjuntando los listados de descuentos de nómina de los deudores de libranzas correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, enero, febrero, marzo, abril de 2022. Igualmente complete la información hasta los listados de descuentos del mes de junio de 2023, de todos y cada uno de los deudores funcionarios de la pagaduría de manera clara, completa y que estos listados vengán acompañados de las consignaciones bancarias o soportes de traslado a la cuenta corriente o copias



legibles de los depósitos judiciales respectivos para cada periodo tal como se solicita en la petición BF-INT-027-2022 de fecha 27 de abril de 2022.

IV.- ACTUACIONES PROCESALES

La presente acción de tutela, correspondió a este Despacho mediante reparto, bajo el radicado No. 08433-4089-002-2023-00225-00. Así mismo, previo análisis de los requisitos, fue admitida mediante auto de fecha cinco (05) de julio de 2023, en el cual se ordenó oficiar a la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO**, para que se pronunciara sobre los hechos materia de esta acción constitucional.

Igualmente se ordena TENER como pruebas documentales las aportadas con la acción de tutela, aportadas por su Representante Legal y Agente Interventora Sra. **MARIA MERCEDES PERRY FERREIRA** identificado con C.C. No. 20.902.555.

Igualmente se vinculó a la **OFICINA DE TALENTO HUMANO** de dicha alcaldía, para rinda informe con respecto a los hechos expuestos por la cognoscente.

V.- CONTESTACIÓN ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAMBO

Esta agencia judicial, notificó en debida forma a la parte accionada Oficina Sisbén de Malambo correo electrónico contactenos@malambo-atlantico.gov.co; educacion@malambo-atlantico.gov.co; mimeza24@hotmail.com piedad-leal@hotmail.com ; talento@malambo-atlantico.gov.co como se observa:

NOTIFICA ADMISION ACCION DE TUTELA 084334089002-2023-00225-00

Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Atlántico - Malambo

<j02prmpalmalambo@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 5/07/2023 3:25 PM

Para: pagadurias@buenfuturo.net.co <pagadurias@buenfuturo.net.co>; pagadurias@colcapital.net.co <pagadurias@colcapital.net.co>; contactenos@malambo-atlantico.gov.co <contactenos@malambo-atlantico.gov.co>; educacion@malambo-atlantico.gov.co <educacion@malambo-atlantico.gov.co>; [misael enrique meza perez <mimeza24@hotmail.com>](mailto:misael.enrique.meza.perez@mimeza24@hotmail.com); talento@malambo-atlantico.gov.co <talento@malambo-atlantico.gov.co>

📎 2 archivos adjuntos (17 MB)

01Demanda.pdf; 2023-00225 ADMISION TUTELA.pdf;

SE NOTIFICA LA ADMISION A LOS SUJETOS PROCESALES DE LA ACCION DE TUTELA

A pesar de haber sido notificado, la parte accionada o sea la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO** y al vinculado **OFICINA TALENTO HUMANO**, no dieron contestación a nuestros interrogantes, de la acción constitucional, presentada por la Sra. **MARIA MERCEDES PERRY FERREIRA** identificado con C.C. No. 20.902.555, en su calidad de Representante Legal y Agente Interventora de la **COOPERATIVA DE APOORTE Y CRÉDITO BUEN FUTURO EN INTERVENCIÓN- BUEN FUTURO EN INTERVENCIÓN**.

IV. PROBLEMA JURÍDICO

En esta oportunidad corresponde a esta Agencia Judicial establecer si:

¿Vulnera la **ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAMBO**, los derechos fundamentales al Petición (Art. 23) de la Constitución Nacional? ¿al no enviarle respuesta adjuntando los listados de descuentos de nómina de los deudores de libranzas correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, enero, febrero, marzo, abril de 2022. Igualmente complete la información hasta los listados de descuentos

Malambo, Calle 11 N° 14 -23

Tel: (5) 388 5005 ext. 6036. www.ramajudicial.gov.co

Correo: j02prmpalmalambo@cendoj.ramajudicial.gov.co



del mes de junio de 2023 de todos y cada uno de los deudores funcionarios de la pagaduría de manera clara, completa y que estos listados vengan acompañados de las consignaciones bancarias o soportes de traslado a la cuenta corriente o copias legibles de los depósitos judiciales respectivos para cada periodo tal como se solicita en la petición BF-INT-027-2022 de fecha 27 de abril de 2022, en petición presentada por la accionante Sra. **MARIA MERCEDES PERRY FERREIRA** identificado con C.C. No. 20.902.555 en su calidad de Representante Legal y Agente Interventora de la **COOPERATIVA DE APOORTE Y CRÉDITO BUEN FUTURO EN INTERVENCIÓN- BUEN FUTURO EN INTERVENCIÓN?**

V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL DESPACHO

Es competente este Despacho para conocer de la presente acción de tutela de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.

V.I.- DE LA ACCIÓN DE TUTELA.

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, es un mecanismo procesal complementario, específico y directo con el que cuentan los coasociados para la pronta y eficaz protección judicial de los derechos constitucionales fundamentales que en una determinada situación jurídica se vean seriamente amenazados o vulnerados.

Es un medio específico, porque se contrae a la protección inmediata de tales derechos cuando quiera que éstos se vean afectados de modo actual e inminente.

Es suplementario, porque su procedencia está supeditada a que no exista otro mecanismo legal con el cual se pueda conjurar esa amenaza o, existiendo, la inminencia del daño no permite mecanismo distinto a dicha acción por evidenciarse que de no actuarse con inmediatez, aquél se tornaría irreparable, es decir, la acción de tutela es una herramienta *supra legal*, que ha sido instituida para dar solución eficiente a situaciones de hecho generadas por acciones u omisiones de las autoridades públicas o particulares, en los casos expresamente señalados.

Bajo este mismo presupuesto, el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, determinó que la tutela procede

“contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley”, y también, contra las acciones u omisiones de los particulares.

Respecto a vulneración de los derechos fundamentales que pueden causar las entidades o funcionarios que ocupan el ordenamiento constitucional y a su afecto de irradiación se puede sostener que el flujo obliga ajustar el orden objetivo de valores establecido en el la carta política.

En este sentido, la acción de tutela es el mecanismo idóneo de protección de los derechos fundamentales, y queda compelida para que proceda solamente en los supuestos que contempla el inciso final del artículo 86 Superior.

Analizadas las pretensiones del cognoscente en que no se siga vulnerando al derecho fundamental de Petición (Art. 23), al no enviarle respuesta adjuntando los listados de descuentos de nómina de los deudores de libranzas correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, enero, febrero, marzo, abril de 2022. Igualmente complete la información hasta los listados de descuentos del mes de junio de 2023 de todos y cada uno de los deudores funcionarios de la pagaduría de manera clara, completa y que estos listados vengan acompañados de las consignaciones bancarias



o soportes de traslado a la cuenta corriente o copias legibles de los depósitos judiciales respectivos para cada periodo tal como se solicita en la petición BF-INT-027-2022 de fecha 27 de abril de 2022, en petición presentada por la accionante Sra. **MARIA MERCEDES PERRY FERREIRA** identificado con C.C. No. 20.902.555 en su calidad de Representante Legal y Agente Interventora de la **COOPERATIVA DE APOORTE Y CRÉDITO BUEN FUTURO EN INTERVENCIÓN- BUEN FUTURO EN INTERVENCIÓN**; pero se evidencia que la violación del derecho que la originó fundamentalmente es el derecho de petición, se vislumbra que no se dio respuesta oportuna, eficaz y de fondo al interesado a fin de garantizar las finalidades de los derechos fundamentales.

V.II.- DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA. SENTENCIA 077/2018.

El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. En desarrollo del Texto Superior, la Ley 1755 de 2015 reguló todo lo concerniente al derecho fundamental de petición, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional se ha referido al derecho de petición, precisando que el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas evasivas o elusivas.

En reciente Sentencia C-418 de 2017, este Tribunal reiteró que el ejercicio del derecho de petición se rige por las siguientes reglas y elementos de aplicación:

- “1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.*
- 2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política.*
- 3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser oportuna, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario.*
- 4) La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita.*
- 5) El derecho de petición fue inicialmente dispuesto para las actuaciones ante las autoridades públicas, pero la Constitución de 1991 lo extendió a las organizaciones privadas y en general, a los particulares.*
- 6) Durante la vigencia del Decreto 01 de 1984 el término para resolver las peticiones formuladas fue el señalado por el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que señalaba un término de quince (15) días para resolver, y en los casos en que no pudiese darse la respuesta en ese lapso, entonces la autoridad pública debía explicar los motivos de la imposibilidad, señalando además el término en el que sería dada la contestación.*
- 7) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. En sentido concurrente, el silencio administrativo es prueba de la violación del derecho de petición.*
- 8) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea el derecho de petición no la exonera del deber de responder.*
- 9) La presentación de una petición hace surgir en la entidad, la obligación de notificar la respuesta al interesado”.*



VII. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO.

Dentro del caso *sub lite*, emerge del cuadro fáctico recreado en la solicitud de amparo, en especial, de los hechos expresados por el promotor que la acción constitucional trata que no se le ha realizado él envió de la respuesta adjuntando los listados de descuentos de nómina de los deudores de libranzas correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, enero, febrero, marzo, abril de 2022. Igualmente complete la información hasta los listados de descuentos del mes de junio de 2023 de todos y cada uno de los deudores funcionarios de la pagaduría de manera clara, completa y que estos listados vengán acompañados de las consignaciones bancarias o soportes de traslado a la cuenta corriente o copias legibles de los depósitos judiciales respectivos para cada periodo tal como se solicita en la petición BF-INT-027-2022 de fecha 27 de abril de 2022, en petición presentada por la accionante Sra. **MARIA MERCEDES PERRY FERREIRA** identificado con C.C. No. 20.902.555 en su calidad de Representante Legal y Agente Interventora de la **COOPERATIVA DE APOORTE Y CRÉDITO BUEN FUTURO EN INTERVENCIÓN- BUEN FUTURO EN INTERVENCIÓN**.

Pues bien, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, el mecanismo de amparo constitucional tiene como propósito la defensa inmediata de derechos fundamentales, *“cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este decreto”*¹. Así pues, la acción de tutela resulta improcedente:

- (i) cuando no tenga como pretensión principal la defensa de garantías fundamentales;
- o
- (ii) cuando la acción u omisión que atenta contra las mismas no sea actual o existente, por ejemplo, porque haya cesado o se haya consumado, y por tanto el amparo carezca de objeto.

El Despacho percibe que el promotor del resguardo, Oficina de Sisbén de Malambo no dio respuesta a la acción constitucional.

Es pertinente indicar que el derecho fundamental de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución, el cual establece que cualquier persona, ya sea por razones que involucran el interés general o particular, tiene el derecho a presentar, de manera respetuosa, peticiones a las autoridades y obtener una respuesta expedita. El mismo comprende, a su vez, la posibilidad de realizar peticiones a particulares en los casos que determine la ley.

En ese orden, es apodíctico que el derecho de petición, como institución jurídica, encuentra su razón de ser en la necesidad de regular las relaciones entre las autoridades y los particulares, con el fin de que estos últimos puedan conocer y estar al tanto de las actuaciones de cualquier ente estatal. Desde este punto de vista, su núcleo esencial está en la pronta respuesta que se les brinde a las solicitudes presentadas.

Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha señalado la relevancia que cobra el derecho fundamental de petición, ya que se constituye en un instrumento clave para el funcionamiento de la democracia participativa, y para el acceso a derechos como el de información y libertad de expresión, entre otros.

En esa línea de pensamiento, la Corte Constitucional ha manifestado, a su vez, que el derecho de petición no solo implica la posibilidad de presentar solicitudes a las autoridades estatales o a entes particulares, cuando la ley lo permita, sino, de igual manera, que se dé una oportuna respuesta con sujeción a los requerimientos establecidos en la ley para dicha petición. Es decir, independientemente de que lo resuelto por la entidad sea adverso o no

¹ Artículo 1º del Decreto 2591 de 1991.



a los intereses del peticionario, la resolución del asunto debe contar con un estudio minucioso de lo pretendido, argumentos claros, que sea coherente, dé solución a lo que se plantea de manera precisa, suficiente, efectiva y sin evasivas de ninguna clase.

Así, para tener claridad sobre los elementos del derecho de petición, la Corte Constitucional ha indicado en la sentencia T-414 de 2010, que el mismo se compone de:

- «1. La posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
2. La obtención de una respuesta que tenga las siguientes características:
- (i) Que sea oportuna;
 - (ii) Que resuelva de fondo, en forma clara y precisa lo solicitado; lo cual supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud de manera completa, sin evasivas respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados.
 - (iii) Que la respuesta sea puesta en conocimiento del peticionario.

La respuesta es independiente del hecho de si es favorable o no, pues no necesariamente dar una respuesta de fondo implica acceder a lo pedido».

Así las cosas, la salvaguardia que se amparará el derecho fundamental de petición enarbolada por el peticionario, en razón que no se observa la misma fue contestada, y tampoco en el trámite del procedimiento tutelar, puesto necesita se le realice la visita como herramienta de estadística para la selección y asignación de subsidios.

Frente a los hechos y pretensiones, la Alcaldía de Malambo, guardo silencio frente al requerimiento efectuado por el juzgado, así las cosas, se procederá a darle la aplicación a la presunción de veracidad, referida en el art. 20 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual reza:

“Si el informe no fuese rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el Juez estime necesaria otra averiguación previa”.

Es sabido que, el artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Por lo tanto, el legislador en desarrollo en lo consagrado en la constitución, expidió la Ley 1755 de 2015, la cual reguló todo lo concerniente al derecho fundamental de petición, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

Al unísono, el artículo 15 de la Ley 1577 de 2015, establece que las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos.

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-172 de 2013 planteó que:

*“...El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.
El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición...”*

La jurisprudencia constitucional ha sido clara en reiterar, que el derecho fundamental de petición resulta vulnerado cuando no hay respuesta oportuna, esto en el entendido radicar



una petición no implica solamente la posibilidad de manifestar una inquietud ante la administración, sino que conlleva necesariamente el derecho a obtener y a exigir una respuesta clara y definitiva sobre esa inquietud. En consecuencia, surge el deber correlativo de la administración de contestar la petición al ciudadano dentro del término que estima la normatividad vigente.

Por consiguiente, aún nos encontramos ante una vulneración del derecho fundamental de petición, considerando que, aún sin la notificación de lo decidido, no existe una respuesta efectiva.

En merito a lo expuesto, este despacho procederá a amparar el derecho fundamental de PETICIÓN, a la accionante Sra. **MARIA MERCEDES PERRY FERREIRA** identificado con C.C. No. 20.902.555 en su calidad de Representante Legal y Agente Interventora de la **COOPERATIVA DE APOORTE Y CRÉDITO BUEN FUTURO EN INTERVENCIÓN- BUEN FUTURO EN INTERVENCIÓN**, contra de la **ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAMBO**, a fin a que proceda a dar respuesta adjuntando los listados de descuentos de nómina de los deudores de libranzas correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, enero, febrero, marzo, abril de 2022. Igualmente complete la información hasta los listados de descuentos del mes de junio de 2023 de todos y cada uno de los deudores funcionarios de la pagaduría de manera clara, completa y que estos listados vengán acompañados de las consignaciones bancarias o soportes de traslado a la cuenta corriente o copias legibles de los depósitos judiciales respectivos para cada periodo tal como se solicita en la petición BF-INT-027-2022 de fecha 27 de abril de 2022.

En consecuencia, se ordenará a la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO**, que en el término máximo de veinticuatro (24) horas, siguiente a la notificación de esta providencia, proceda a dar respuesta adjuntando los listados de descuentos de nómina de los deudores de libranzas correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, enero, febrero, marzo, abril de 2022. Igualmente complete la información hasta los listados de descuentos del mes de junio de 2023 de todos y cada uno de los deudores funcionarios de la pagaduría de manera clara, completa y que estos listados vengán acompañados de las consignaciones bancarias o soportes de traslado a la cuenta corriente o copias legibles de los depósitos judiciales respectivos para cada periodo tal como se solicita en la petición BF-INT-027-2022 de fecha 27 de abril de 2022.

Asimismo, proceda a enviar constancia del recibido del derecho de petición por parte de la actora.

VIII.- DECISION

En virtud de lo expuesto, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Malambo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

IX.- RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR, el derecho fundamental de **PETICIÓN**, accionante Sra. **MARIA MERCEDES PERRY FERREIRA** identificado con C.C. No. 20.902.555 en su calidad de Representante Legal y Agente Interventora de la **COOPERATIVA DE APOORTE Y CRÉDITO BUEN FUTURO EN INTERVENCIÓN- BUEN FUTURO EN INTERVENCIÓN**, contra de la **ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAMBO**, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR, a la **ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAMBO** que en el término máximo de veinticuatro (24) horas, siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a dar respuesta de fondo a la accionante, adjuntando los listados de descuentos de nómina de los deudores de libranzas a favor de la **COOPERATIVA DE APOORTE Y CRÉDITO BUEN FUTURO EN INTERVENCIÓN- BUEN FUTURO EN INTERVENCIÓN**, correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, enero, febrero, marzo, abril de 2022. Igualmente complete la información de los listados de descuentos del



mes de junio de 2023, que estos listados sean acompañados de las consignaciones bancarias o soportes de traslado a la cuenta corriente o copias legibles de los depósitos judiciales respectivos para cada periodo tal como se solicita en la petición BF-INT-027-2022 de fecha 27 de abril de 2022, conforme lo motivado. Asimismo, proceda a enviar constancia del recibido del derecho de petición por parte de la actora.

TERCERO: NOTIFICAR, esta providencia personal, telegráficamente o por cualquier medio eficaz a las partes, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, preferiblemente a través de los canales digitales dispuestos para tal fin. Incorporar las constancias del caso en el expediente digital.

CUARTO: REMITIR, a la CORTE CONSTITUCIONAL para su eventual revisión, en caso de noser impugnada esta decisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**PAOLA DE SILVESTRI SAADE
JUEZA**

Firmado Por:

Paola Gicela De Silvestri Saade

Juez

Juzgado Municipal

Juzgado 002 Promiscuo Municipal

Malambo - Atlantico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9346ecb09a75ea1e34eda5bd17522578497c72c147c535907bf8bd0240fda9b1**

Documento generado en 18/07/2023 01:36:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>